

TELEVISIÓN: LA LEGITIMIDAD PERDIDA

Javier Protzel

CRISIS DE LA POLÍTICA Y AUGE DE LA TELEVISIÓN

Desde la difusión del video Kouri-Montesinos y el anuncio de nuevas elecciones generales por Fujimori en setiembre del 2000, la existencia de dos procesos políticos distintos pero interrelacionados se hizo evidente. Primero, se iniciaba otra campaña -o proseguía la anterior, aceptando que Toledo acertó al vaticinar una «tercera vuelta»- y segundo, se derrumbaba el régimen autoritario de diez años. Y el peso relativo atribuido a cada uno fue variando conforme avanzaban los meses. Hasta que con un nuevo presidente electo y Montesinos capturado, quedó claro que el resultado del 3 de Junio constituía una estabilización jurídico-institucional que era el corolario natural del primero, mientras que el segundo, el proceso de desmantelamiento del gobierno anterior, prosigue su curso, que probablemente será largo y complicado.

A medida que se fue abriendo la caja de Pandora de la corrupción, se constataba que los tentáculos del fujimorismo llegaban incluso más allá de lo que hace apenas cuatro años muchos suponían. Menos por el hecho de su formidable extensión (Poder Judicial, organismos electorales, Fuerzas Armadas y policiales, medios de comunicación, bancos, etcétera) que por la naturaleza y objetivos de su organización. Mientras las críticas al fujimorismo se centraron en la aplicación de la ortodoxia neoliberal, sus discursos seguían retratando a un régimen derechista con planes de un cuarto de siglo de duración, como el de Pinochet, acaso el de Malasia o el de Corea del Sur hace doce años. Para esa percepción, el autoritarismo político, el abuso contra los derechos humanos o el uso táctico del secreto y la sorpresa eran instrumentos de un **Plan Verde** con metas de gobernabilidad a largo plazo mediante una dictadura cívico-militar. Pero la realidad no era tan mansa. El pretendido designio fascistoide ocultaba su propia transformación en algo quizá más simple y perverso:., una golosa organización de delincuentes con poderes secretos.

Esta constitución de mecanismos ocultos durables para el enriquecimiento ilícito marca la diferencia. Dos razones explican por qué, una referida al pasado, otra al presente. Una es la antigua y larga raíz de la corrupción, hundida en lo peor de una cultura política

poco avenida con la democracia. Odría, Leguía, y más atrás, Meiggs, quien según se dice, introdujo la **coima**. Por otro, la persistencia de esa tradición, que precisamente atraviesa la modernización del país, y de la que se nutre selectivamente. Por ello, viejas prácticas como el asistencialismo clientelista y el fraude electoral han confluído en su versión exacerbada con el sofisticado socavamiento del Estado de Derecho, los negociados de armas y el crimen organizado. Los calificativos de **mafia** o de **gangsters** a sus protagonistas ya no son, entonces, una analogía impresionista. Manuel Castells ha analizado con lucidez cómo las redes criminales son un aspecto significativo de la globalización de la economía, constituyendo en algunos países un virtual contrapoder.⁽¹⁾ Pero lo que singulariza a algunos países como el Perú es que la instauración de un autoritarismo mafioso es indisociable de la exigüidad y subordinación de los nuevos espacios de confrontación de los asuntos públicos.

Al respecto no basta con afirmar que la crisis institucional y de los partidos ha expresado el desajuste entre lo social y el mundo político. Este último debe ser explicado tomando en cuenta las vicisitudes de quienes siendo nuevos actores sociales en los setenta terminaron desmovilizándose en los noventa. Martín Tanaka no considera que ese retroceso equivalga forzosamente al total desencanto, sino a un nuevo tipo de relación de la sociedad con la política, articulada por los medios masivos de comunicación.⁽²⁾

No debe olvidarse que en la década del noventa coinciden el crecimiento de una población electoral de volúmenes difíciles de manejar -de poco más de 8 millones en 1985 a unos 12 millones diez años después-, mientras que el número de hogares equipados con televisión pasa en el mismo período de aproximadamente 1'830,000 a casi 3'500,000. A ello debe añadirse que la consolidación de un nuevo espacio público con predominio de la televisión es paralela a la fragmentación sobrevenida por los ajustes económicos y a su posterior agravamiento por la recesión. Así, el carácter «estratégico» que los servicios de inteligencia le habían otorgado a la pequeña pantalla para la guerra interna se prolonga

¹. CASTELLS, Manuel: **The Information Age: Economy Society and Culture**, Tomo III. **End of Millenium**. Oxford, Blackwell, 1998.

². TANAKA, Martín: «Del movimientismo a la media-política: cambios en las relaciones entre la sociedad y la política en el Perú de Fujimori.» En CRABTREE, J. y THOMAS, J. **El Perú de Fujimori**. Lima, Universidad del Pacífico/ IEP, 1999. pp. 422-430.

después de 1992 en pieza clave de las gestas reeleccionistas y, por supuesto, de ocultamiento de los arcanos del poder.⁽³⁾

ASCENSO Y CAÍDA DEL PRESTIGIO DE LOS EMPRESARIOS

Aunque esto último no sea nada nuevo, cabe llamar la atención sobre la diferente actuación de la televisión en la presente transición democrática con respecto a la del proceso de 1978-1980. La devolución de los canales de televisión a sus propietarios por Fernando Belaunde en 1980 correspondía a una transición **pactada**: ocurría junto con el retorno **institucional** de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y la entrega de una caja fiscal saneada por Silva Ruete, mientras los propietarios reasumían la conducción de sus canales. No era difícil que los dueños de la televisión fuesen entonces identificados con la libertad de información y opinión, y el inicio optimista de un ciclo venturoso. Más aún, el reequipamiento de las estaciones con tecnología nueva (las primeras transmisiones oficiales con señal a color fueron las de la ceremonia de transferencia del mando a Belaunde el 28 de Julio de 1980) los izaba a la categoría de innovadores, reforzando su legitimidad y potenciando su preeminencia para establecer líneas periodísticas «correctas». Quien hablaba de políticas de comunicación era satanizado como enemigo de la libertad de información y expresión.

Esta legitimidad, que prácticamente no fue afectada durante los años ochenta, conoció sin embargo reveses. Junto a la oposición a Alan García desde 1987, por obvias razones, la mayoría de los canales respaldó incondicionalmente la candidatura Vargas Llosa. Además del efecto de saturación publicitaria, la derrota electoral del FREDEMO le daba otro mensaje al medio: por razones de volumen y de lenguaje, la audiencia televisiva era eminentemente popular, quedando poco margen para hacer «pasar» mensajes juzgados elitistas, como lo demostró el triunfo del «**chino**». Limitaciones a géneros emergentes como la música «chicha» se convertían en cosas del pasado, al tiempo que se implantaba algo que llamaremos **populismo de mercado**, en el cual cabía perfectamente el discurso pragmático y antipartido del fujimorismo. La televisión colaboraba en la preparación del camino del autoritarismo plebiscitario posterior al

³. A diferencia de la prensa escrita, cuya lectoría no deja de decrecer, pese al aumento de la población y del alfabetismo. Cada vez se lee menos. En 1975 el nivel de lectoría de diarios para Lima metropolitana era de 59.2%; en 1993 alcanzaba sólo al 39.6%. El estimado generoso para el 2000, excluyendo a la prensa chicha, es de alrededor de 34%. (Fuentes: CPI, en **Caretas** 19 de agosto de 1993; CPI **Market Report**, diciembre del 2000).

autogolpe de 1992, mientras los canales disfrutaban de un **boom** publicitario que llegó hasta 1996. Doble protagonismo del medio, por la agenda política que construyó y por el rol que sus empresarios más conspicuos asumían dentro del dispositivo de control del gobierno. La irracionalidad de ciertos gastos y el endeudamiento bancario, más el declive de la inversión publicitaria desde mediados de 1997, reforzaron la dependencia con respecto del SIN, hasta que el gobierno se convirtió en el primer anunciante. Se integraban a la maquinaria reeleccionista saliendo de la esfera estrictamente empresarial para coordinar con una multiplicidad de instancias ajenas: Fuerzas Armadas, organismos asistenciales del gobierno, voceros del poder legislativo, ONPE, jueces, fiscales, etcétera.

Pero la legitimidad de la televisión empezó a deteriorarse a medida que las transgresiones del Estado de Derecho eran más descaradas y el juego reeleccionista más evidente, sobre todo a través del clientelismo asistencialista.⁽⁴⁾ Tres hechos iniciaron ese proceso: la eliminación empresarial del propietario de Frecuencia Latina mediante argucias legales, la salida del aire del periodista César Hildebrandt y la aparición, en la oposición, de **Canal N**, pese a que también fue amenazado por el poder judicial. El fraude en la primera vuelta del año 2000, maquinado desde servidores informáticos controlados por Montesinos, no fue óbice para demostrar que un sector importante de la sociedad ya no creía en el aparato de propaganda oficialista. Los «**vladivideos**» en que figuran los más importantes empresarios de la televisión recibiendo fajos de billetes, pidiendo favores u ofreciendo despedir a periodistas incómodos cerraron la fase descendente del ciclo de legitimidad política de la televisión de señal abierta.

A diferencia de 1978-1980, ésta transición no fue pactada. Al contrario, tras elegirse al presidente Paniagua quedaron fuerzas armadas desprestigiadas por su cúpula corrompida, déficit fiscal, y empresarios televisivos confundidos en el ambiente gangsteril de celdas y banquillos de acusados.

...PERO SIGUE HABIENDO AUTORITARISMO EN LA SOCIEDAD

Mirando el trecho ya andado, nos damos cuenta de estar viviendo una época de excepcional importancia, quizá un avance más significativo en materia de democratización y participación ciudadana que cualquier otra del siglo XX. Pero nada nos asegura

⁴. A ese respecto recomiendo leer la entrevista a Carlos Tapia en **Cuestión de Estado**, N° 27/28, pp. 38-40. Lima, 2001.

que el camino que andemos sea rectilíneo. La mutación de la democracia representativa, tras el desgobierno alanista, en una de cheque en blanco -o democracia **delegativa**, empleando el término de O'Donnell⁵- que luego se convirtió en dictadura, parece revertir, es cierto.

Sin embargo, está lejos de resolverse el viejo problema del autoritarismo como fenómeno social. La construcción a corto plazo de una sociedad civil vigilante, dispuesta a aceptar consensos es todavía tarea pendiente, en tanto las «figuras salvadoras» sigan predominando en los imaginarios políticos. Descubrir en un líder cualidades de todopoderoso es el reverso de la medalla de quienes se sienten cívicamente impotentes y reciben menos posibilidades de desarrollarse como personas en base a sus propios esfuerzos. Es una actitud regresiva que, como ha señalado Alejandro Ferreyros en esta revista⁶, es acompañada por sentimientos de exclusión y aceptación de una fatalidad. La prepotencia y la humillación sobreviven en los vínculos jerárquicos estrictos existentes casi dentro de cualquier organización actuante en la escena pública, incluyendo partidos y organizaciones de base. En los hechos, nuestras culturas políticas aún reproducen una práctica arcaica de la autoridad que enfatiza una desigualdad primordial, y no generan la autoridad requerida sólo funcionalmente, como correspondería a una democracia moderna.

Este imaginario de la subalternidad fue sistemáticamente estimulado con sobredosis televisivas de **reality, talk y gossip shows**, además de ciertos programas cómicos. La oferta televisiva de señal abierta fue forzada en nombre del **rating** y del gusto de aquél «público cautivo» de los más desfavorecidos, que Montesinos menciona en un video. Contra todo principio, las empresas televisivas los condenaron a ese **pan y circo** como ventana al mundo, transformándolos en rehenes ideológicos. Será útil recordar más adelante que esas tácticas de manipulación formaron parte del clientelismo de Estado, si se quiere revalorizar la dimensión ética de la comunicación televisiva y garantizar la independencia del periodismo.

⁵. O'DONNELL, Guillermo: «¿Democracia delegativa?» En GROMPONE, R. (editor) **Instituciones políticas y sociedad. Lecturas introductorias**. Lima, IEP, 1995.

⁶. FERREYROS, Alejandro: «Liderazgo en ruinas». En **Quehacer**, N° 126. Lima, DESCO, setiembre-octubre del 2000. pp. 6-13.

Pero no esperemos en lo inmediato grandes cambios en el medio, que continuará sometido a los defectos y virtudes de la lógica del mercado. Incluso hay derecho a ser pesimista, no por ignorar los logros sustantivos ya conseguidos contra la corrupción, sino por que todo es susceptible de retrocesos. En junio del 2001 casi la totalidad de los empresarios de la televisión de señal abierta está o detenida, o fugada, o con procesos penales abiertos. Indicio clarísimo de una crisis de élites, o más bien de su virtual inexistencia, lo cual es gravísimo en el caso de los medios peruanos. Salvo excepciones que destacaron en su esfuerzo por ejercer una comunicación democrática, hubo además de venalidad, una irresponsabilidad que no se sabe a qué extremos hubiese llegado de no caer el régimen de Fujimori.

Junto a las dificultades económicas y el retraso tecnológico, la corrupción estuvo en el origen del desmoronamiento de la Unión Soviética. Pese a los augurios de democratización, ese país quedó a merced de mafias tráfugas de la vieja guardia política, poco interesadas en reconstruir el país. ¿Qué pasará con la televisión peruana? Con similar irresponsabilidad, no vaya a haber canales peruanos que en un raptó de creatividad empresarial pongan locutoras de noticias ligeras de ropa para aumentar el **rating**, como en la televisión moscovita. Suena a broma, ¿pero acaso no habrá habido rasgos en la nuestra que al observador externo le parezcan un cuento inverosímil, un chiste grotesco?